

La globalización cuestionada*

*José Cademartori***

El autor cuestiona la actual globalización y cree que “otro mundo es posible”. Para ello describe diversas propuestas de reformas que han surgido desde los ámbitos académicos y sociales de numerosos países para cambiar el rumbo globalizador. Muestra el nacimiento y desarrollo del movimiento “altermundista”, desde los foros sociales a las movilizaciones masivas en los más diversos países y los cambios políticos que están despuntando en América latina. Una parte importante de sus propuestas están referidas a Chile, que, a pesar de aparecer como alumno ejemplar del modelo neoliberal, ha mostrado ya signos de agotamiento y necesidad de cambios económicos y políticos.

* Resumen del libro de igual título, elaborado por el autor para RE.

** Investigador chileno de vasta actuación en su país y en el exterior. Fue diputado nacional (1959-1973) y ministro de Economía (1973) del presidente Allende (1973).

Primera parte.

La globalización en el mundo

La globalización neoliberal genera un nuevo ordenamiento de los conflictos en el nivel mundial pues implica un creciente traspaso de valor-trabajo desde los pueblos del Tercer Mundo y los trabajadores del Primero hacia las transnacionales. Incrementa la brecha entre países ricos y pobres que no cesa de profundizarse. Expande las desigualdades al interior de los estados. La globalización provoca un nuevo conflicto entre la naciente burguesía transnacional y un multiétnico y heterogéneo universo de trabajadores y clases subordinadas de todas las naciones.

En el siglo XX, sobre todo a partir de los años sesenta se extendió la utilización de los trabajadores de la periferia del mundo. Los métodos empleados son muy variados; abarcan desde formas de esclavitud o semiesclavitud hasta el empleo de la maquinaria y la automatización más avanzada. Tal es la base de la acumulación originaria del capital transnacional. Los altos niveles de desempleo en todos los países son el piso sobre el cual se asienta el modelo neoliberal. Esta doctrina afirma que los salarios elevados son la causa y el alto desempleo la consecuencia. Por lo contrario, la realidad muestra que los salarios altos prevalecen cuando hay bajo o nulo desempleo mientras que los salarios bajos se presentan cuando

hay alto desempleo.

Un importante efecto del sistema transnacional es el cambio en la composición numérica del proletariado mundial, en el cual las naciones subdesarrolladas aportan ya el segmento mayoritario. En la mayor parte de los países están aún en el proceso de aprendizaje de las formas de lucha. En todos los continentes proliferan los conflictos laborales. Surgen los sindicatos internacionales y se extiende la coordinación mundial en la lucha sindical.

La década de los setenta marca la divisoria entre dos épocas. La actual se inicia con la instalación de regímenes dictatoriales, la caída de los regímenes socialistas y la instalación de las doctrinas neoliberales. La realidad de hoy se asemeja a las condiciones existentes en dos períodos del siglo XIX, uno, el premonopolista y el otro, a la etapa de formación de los monopolios que abarca los decenios posteriores a la derrota de la Comuna de París.

Marx formuló la llamada ley de la acumulación de riqueza en un polo y de acumulación de pobreza en el otro. Esta ley parece encontrar plena vigencia en la época actual de predominio del modelo neoliberal. Según los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde 1960 se profundiza la brecha entre ricos y pobres en escala planetaria.

Han surgido varias corrientes de

alternativa a la globalización neoliberal, distinta a las corrientes marxistas o socialistas. Estos enfoques convergen en una profunda crítica al capitalismo transnacional por su responsabilidad en la depredación de la naturaleza y de los seres humanos, particularmente en los países pobres. En la argumentación de los ecologistas es ilusorio que los países pobres puedan alcanzar el nivel de los países industrializados. Por otro lado ha cobrado cada vez más impulso la propuesta de establecer el impuesto Tobin a las transacciones de divisas y aumentar los impuestos a los consumos suntuarios y a las herencias. Otra línea de acción es el cierre de los llamados paraísos fiscales. Hay nuevas posibilidades de acción conjunta entre estas corrientes, como también entre las nuevas capas medias y los trabajadores organizados.

La creación de la OMC (1994) no ha traído la prosperidad para todas las naciones como se proclamaba. Los mercados de los países industrializados continúan cerrados o protegidos de competencia de los productos de los países del Sur mientras éstos han eliminado buena parte de sus barreras defensivas. A la vez, las transnacionales, en especial las tecnológicas han ampliado sus ventajas en los países en desarrollo. El marco regulador de formación del capital transnacional son las políticas neoliberales que despejan el terreno a las multinacionales; au-

mentan la deuda externa y los consiguientes intereses; agravan el comercio desigual entre productores de materias primas y productores de mercancías elaboradas.

Las transnacionales son determinantes en el dominio del comercio internacional de las materias agrícolas. Ellas implantan alrededor del planeta bebidas y alimentos que contradicen normas dietéticas saludables. Una de las consecuencias de este proceso es la epidemia mundial de obesidad denunciada por la OMS.

En el capitalismo globalizado la disyuntiva para el agricultor independiente es abandonar la tierra o someterse al sistema, en calidad de contratista dependiente, permanentemente endeudado. Esto ha estimulado la batalla de los agricultores contra los abusos de las agroindustrias. El objetivo de la "liberalización del comercio mundial" es desalojar del mercado la llamada "producción agrícola excedente" en circunstancias en que buena parte del planeta tiene carencia de alimentos. Mediante los tratados de libre comercio, las multinacionales quieren imponer sus semillas transgénicas en reemplazo de las autóctonas para obligar a los campesinos a tener que pagarlas cada año, eliminando un derecho ejercido durante milenios. Mientras los campesinos pobres apenas si pueden cancelar sus deudas con las tierras vendidas, las familias urbanas deben

pagar más por espacios menores o por viviendas de peor calidad.

La expansión del modelo neoliberal en las áreas vírgenes pasa a ser cuestión de vida o muerte para los pueblos originarios. La revolución biotecnológica impulsada por las multinacionales amenaza con destruir la diversidad y eliminar multitud de especies nativas, tal como ya sucedió con la llamada revolución verde. Los efectos colaterales de los transgénicos aún se desconocen, por lo que los científicos insisten en que se apliquen los principios de precaución y responsabilidad.

La inferioridad en que se encuentran los pequeños agricultores y campesinos para competir, exige de parte del estado la creación de poderes compradores, bandas de precios, asistencia técnica masiva y crédito a bajo costo. Hay que estimular su organización en formas colectivas de producción y comercialización. Debe asegurarse la completa sindicalización de los trabajadores de la tierra y la negociación colectiva de sus condiciones de trabajo. No pocos países tienen aún pendiente la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. En muchos países la reforma agraria aún parece ser el punto de partida indispensable para la dignificación del campesinado y para la modernización de la agricultura, para elevar el consumo alimenticio de los más pobres, para crear puestos de trabajo, ampliar el mercado interior y mejorar la dis-

tribución de los ingresos.

Si en América latina la década de los ochenta se llamó la década perdida, la de los noventa se puede caracterizar como la década frustrada a pesar de las promesas que traería el fin de las dictaduras militares. En América latina la década de los noventa ha sido el apogeo de los regímenes neoliberales. Se apoyaron en una tecnocracia formada en el neoliberalismo, en la monopolización privada de los medios de comunicación de masas, en sistemas electorales que reducen la representación de las minorías y la diversidad ideológica. Como resultado de este proceso aumentó la abstención electoral y la decadencia de los partidos. Al no encontrar un cauce al descontento se multiplican las crisis políticas y las rebeliones populares que han llevado a la destitución de varios gobernantes de América latina.

Las instituciones públicas de educación y salud sufren constantes recortes presupuestarios que dañan la calidad de vida. Los recursos que se niegan al sector público se entregan en subsidios a empresarios cuyo objetivo no consiste en satisfacer las necesidades básicas de la población. Las privatizaciones de las empresas estatales, han fortalecido la acumulación de riqueza en grandes empresas monopolistas, las alzas de tarifas y han aumentado las fallas en el suministro de los servicios.

En América latina el desempleo se ha mantenido elevado en muchos países en los años de mayor crecimiento económico. Al extenderse la flexibilidad laboral, los nuevos puestos de trabajo se hicieron más precarios. El número absoluto de pobres siguió creciendo a lo largo de la década y primeros años del siglo XXI. Aun en aquellos países donde el índice de pobreza se redujo, persistió la tendencia a una mayor inequidad, transformando a América latina en el continente con las mayores desigualdades del planeta. El modelo extiende la mendicidad y la niñez abandonada, el narcotráfico, la compraventa de órganos humanos, las redes de prostitución y pedofilia. Por todas partes se elevan los índices de delincuencia.

No es de extrañar que ahora el capital extranjero se apropie de una mayor y más diversificada plusvalía del trabajo de los latinoamericanos. En los primeros años del nuevo siglo, el egreso de capitales volvió a superar su entrada. Los miles de millones de dólares extraídos del continente como ganancias del capital, más los pagos por la pesada deuda externa, limitan seriamente la capacidad de los gobiernos de sacar de la pobreza a más de 200 millones de latinoamericanos que la sufren.

Todo este cuadro invita hacia nuevos enfoques de alternativa. En el ámbito mundial se hace imperiosa la necesidad de la inter-

vención activa de los pueblos para forjar una nueva matriz más pacífica, democrática y justa de las relaciones entre las naciones. Se requiere retomar un programa integral de cooperación Norte-Sur. Hay que crear espacios para estrategias que conjuguen autonomía nacional con solidaridad. Existe un lugar para mecanismos de integración y complementación dentro de cada continente y para la acción común entre las naciones subdesarrolladas del Asia, Africa y América latina.

Se trata de contar con proyectos nacionales de desarrollo sustentable y equitativo, discutidos y aprobados por los ciudadanos. Ello requiere políticas de reindustrialización, comprendidas en estrategias de largo plazo, con un lugar preferente para la investigación científica. Es indispensable la defensa y promoción de las pequeñas y medianas empresas y crear espacios protegidos para cooperativas, empresas autogestionadas y empresas de propiedad colectiva, tanto municipales, regionales como nacionales. Deben ser fortalecidos los sindicatos y el derecho de los trabajadores a participar en las decisiones empresariales que los afectan. Se debería otorgar mayor importancia a las organizaciones gremiales, agrupaciones de consumidores, organizaciones ecologistas, vecinales, educativas, sanitarias, étnicas, culturales y artísticas.

En América latina, el estado ha sido decisivo para el desarrollo de

nuestras naciones. Pero hay que avanzar en su democratización. Debe existir el derecho a legislar por iniciativa ciudadana. Hay que institucionalizar el plebiscito vinculante y las consultas ciudadanas. Se debe afianzar el derecho ciudadano a la información pública proscribiendo el monopolio privado de los medios de comunicación masiva.

Las manifestaciones de Seattle iniciaron una ola de demostraciones masivas que se sucedieron en casi todos los continentes mostrando las posibilidades que se abrían para influir sobre la marcha de la globalización. En el siglo de las comunicaciones instantáneas, las organizaciones sociales masivas pueden coordinarse “en tiempo real” por encima de las fronteras. El Foro Mundial de Porto Alegre 2001 surgió de la necesidad de generar un espacio de convergencia de los diversos movimientos críticos.

Segunda parte.

La globalización en Chile

Una expresión del dinamismo con que se expanden las multinacionales en Chile es el hecho de que sus ventas han crecido más que el Producto Interno Bruto, más que las ventas de las empresas estatales y más que las de las empresas privadas

En los años noventa volvió a repetirse el efecto de la globalización y la liberalización del comer-

cio exterior. Los cultivos tradicionales para el mercado interno se redujeron en pocos años en 400.000 hectáreas, esto es en un 30% de la superficie cultivable. Cuando se creía asegurado el autoabastecimiento alimenticio, las importaciones volvieron a crecer. Entre 1997 y 2002 las deudas de agricultores y campesinos aumentaron por los altos intereses fijados, dispuestos por el Banco Central, que contrajeron el mercado interno. La baja artificial del dólar golpeó a los exportadores, reduciendo sus ingresos en valores reales. Las importaciones de alimentos a precios artificialmente bajos perjudicaron a los agricultores que producen para el consumo interno.

La gran masa de los trabajadores del campo no se benefició de los años de auge. Los puestos de trabajo disminuyeron. En los comienzos de los noventa los mejoramientos fueron mínimos, comparados con las ganancias de las compañías exportadoras. El ingreso promedio del trabajo en las zonas rurales era en el año 2000 inferior al de 1990. En las faenas agrícolas y forestales los subcontratistas descuentan un 30% o más del salario que pagan los empresarios, sin garantizar seguridad en el transporte, ni el pago de las cotizaciones previsionales y de salud. La mayoría de los asalariados de la tierra no registran ahorros o son insuficientes para acceder a pensiones de vejez o invalidez.

Por otro lado, la política del cobre desde Pinochet a Lagos se rige por el decreto ley Piñera que transfiere el ejercicio de la propiedad de los recursos minerales, mediante la llamada "concesión plena". Chile perdió en diez años 4.538 millones de dólares adicionales al permitir que gran parte del mineral extraído se exporte en forma de concentrados y no de refinados. Por otra parte, durante los últimos diez años 43 empresas trasnacionales de un total de 47, simuló "pérdidas" en sus balances, con el fin de no pagar impuestos. Un amplio sector de la opinión pública apoya el establecimiento de un *royalty* o regalía igual al que esas mismas compañías pagan a los estados donde tienen inversiones similares.

Durante los noventa, la deuda externa de Chile siguió aumentando. Al alcanzar la mitad del Producto Interno Bruto, la deuda externa vuelve a convertirse en el presente en una bomba de tiempo que puede estallar, ante una nueva crisis internacional. Un ejemplo es Enersis, el mayor consorcio eléctrico del país, el cual pasó a poder de Endesa-España. Sin haber aportado un solo kilowatt, Enersis, acumuló una deuda de 12.000 millones de

dólares, cifra equivalente a poco menos de un tercio del total de la deuda de Chile.

Entendida como el proceso de internacionalización de las fuerzas productivas de la humanidad -movimientos de capital, mercancías, servicios, trabajadores y tecnologías-, José Cademartori muestra en *La globalización cuestionada* el complejo y contradictorio cuadro en que se encuentra la economía mundial a comienzos del presente siglo. La tesis del autor es que hemos pasado del capitalismo monopolista que predominó hasta la década de los sesenta al capitalismo trasnacional que hoy nos rige. El autor desentraña la anatomía y la fisiología de esta nueva especie de capital, la que alcanza ya el número de 60.000 sociedades que controlan cerca de 700.000 filiales alrededor del planeta. La rapidez con que se expanden estos conglomerados, la magnitud de los capitales propios y ajenos que concentran y centralizan es de tal magnitud que sólo las 200 trasnacionales mayores bastan para equiparar el producto interno sumado de 150 estados del planeta. El libro explica cómo el libre comercio y las políticas neoliberales impulsadas por las trasnacionales, especialmente en las relaciones laborales, el medio ambiente, la seguridad social y los movimientos financieros están causando serios estragos en los países en desarrollo.

Si continúa esta tendencia al momento de celebrar los 200 años de la independencia nacional, la mayor parte de la produc-

ción y del mercado estarán controlados por las multinacionales. A fines de 2003, el valor acumulado de las inversiones extranjeras sumado a la deuda externa constituía un pasivo total de unos 85.000 millones de dólares. Esto significa que alrededor del 50% de los activos físicos de Chile pertenecen ya o están hipotecados al capital foráneo. Como resultado los envíos al exterior de las rentas netas del capital transnacional se incrementan constantemente.

La globalización neoliberal ha contribuido a una mayor concentración de los activos en pocas manos, no sólo del capital extranjero, sino también de los grandes empresarios chilenos. Unos 90 grupos financieros controlan la mayor parte de las grandes empresas. En 2000 existían unas 3.000 grandes empresas. Ellas realizaban el 72% de las ventas. En contraste las 62.000 PYMES sólo accedían al 23% del mercado nacional y los 330.000 microempresarios no alcanzaban al 5% de las ventas.

El 10% de la población más rica del país ha aumentado fuertemente su participación en el ingreso nacional en los últimos treinta años. En cambio, los pobres son ahora más numerosos y la pobreza abarca a un mayor número de chilenos. La distancia entre unos y otros se ha agrandado. El lema "crecimiento con equidad" en la práctica ha sido un "crecimiento con desigualdad".

En el texto se explica por qué el Tratado de Comercio firmado entre los Gobiernos de Chile y de Estados Unidos profundizará la transnacionalización de la economía chilena. Estados Unidos no modificó a favor de Chile su sistema de aranceles escalonados. Por otro lado, los norteamericanos entrarán a licitar con las mismas facilidades que los nacionales al mercado de compras gubernamentales. En cuanto a la industria cultural, en EUA se entiende que el Tratado obliga a Chile a no otorgar nuevas protecciones a la producción nacional. Se refuerzan los derechos de propiedad intelectual que otorgan monopolio a las compañías tecnológicas estadounidenses. Una de las consecuencias puede ser el alza en los precios de numerosos medicamentos de marca, ante la imposibilidad de fabricar genéricos. En materia de inversión financiera, Chile renunció a utilizar libremente medidas como el encaje, aplicable a la entrada de capitales de corto plazo, quedando el país limitado para frenar los movimientos especulativos de capital. No sólo se recortan atribuciones propias que la Constitución otorga a los poderes ejecutivo y legislativo, sino también del poder judicial, ya que las empresas estadounidenses a diferencia de las nacionales podrán eludir la justicia chilena, acogiéndose al tribunal internacional que se crea por este Tratado.

La inversión foránea directa, uno de los objetivos del Tratado, no es

la única fuente de capital procedente del exterior. Economías que han experimentado un formidable desarrollo han recurrido muy poco a este tipo de inversión foránea, mas bien la han limitado estrictamente. En general, será preferible recurrir al crédito externo como complemento para financiar inversiones rentables de las empresas nacionales en vez de fomentar la instalación de las multinacionales. El texto sustenta la tesis de que el Estado debe reservarse el derecho de aceptar o no el proyecto inversor, debe evaluar las ventajas concretas que representa y compararlo con sus costos y otras opciones para el país.

En materia de recursos naturales debe extenderse el principio constitucional de que ellos son de posesión plena del estado, sin perjuicio de formas limitadas de concesión a privados. La historia chilena ha demostrado que las empresas estatales prestaron un enorme servicio al desarrollo de la nación favorecieron la descentralización y una distribución más equitativa de sus frutos.

Bajo el gobierno del Frente Popular, se creó una "gran fábrica" de proyectos industriales con el aporte de calificados profesionales del país, imbuidos de mística y patriotismo: la Corporación de Reconstrucción y Fomento de la Producción (CORFO). Hay que recrear la CORFO y levantar otros centros tecnológicos. Se debe impulsar la investigación científica,

la experimentación tecnológica en universidades e institutos públicos. A la vez se requiere la elevación masiva de la calificación de los trabajadores, técnicos y profesionales.

Se requiere de un Proyecto País que nos oriente, proyecto a ser conocido, debatido, sancionado y asumido por el conjunto de la ciudadanía. El Proyecto Nacional de Desarrollo (PND) debe decirnos cuáles son nuestras metas y objetivos, qué porvenir le ofrecemos a las nuevas generaciones. El PND nos debe instar a regular respetuosamente nuestro intercambio con la naturaleza. Y cómo reanudar el proyecto industrializador, interrumpido hasta hoy, pero adaptado a las perspectivas del siglo XXI, cómo proteger y fortalecer a trabajadores y empresarios nacionales, cómo asegurar el desarrollo equilibrado de todas las regiones, y comunas del país. En el marco y objetivos del PND, debemos revisar las privatizaciones, caducar las concesiones onerosas, desarrollar un fuerte sector público, delimitar y garantizar el desarrollo de las distintas áreas de propiedad, -estatal, regional, municipal, social, privada, mixta, de cooperativas y de trabajadores-.

Chile debe contar con un estado capacitado económicamente para emprender las nuevas responsabilidades. Esto significa una nueva estructura de ingresos, tributarios y otros, que transfiera recur-

esos desde los sectores minoritarios que se apropian de una proporción excesiva e injusta de los ingresos generados con el aporte de todos, hacia los programas sociales, servicios públicos e inversión productiva pública. Redistribuir es tarea políticamente difícil que será resistida por los afectados, por todos los medios. Por eso se requiere contar con apoyo de una amplia mayoría nacional. Se necesita un nuevo estado que se haga respetar, con autoridad moral, pero nada autoritario y muy participativo, un poder centralizado en algunas materias y descentralizado en otras, transparente y sometido al control ciudadano.

Pero la soberanía no puede ser un camino solitario, al margen de nuestros vecinos y hermanos.

Nuestros estados latinoamericanos en alianza con los del mundo en desarrollo, más el apoyo de los movimientos y gobiernos solidarios del primer mundo, pueden constituir una fuerza capaz de abrir paso a otro mundo posible, a una nueva vía hacia la integración mundial, pacífica, democrática y justa.

Santiago de Chile, junio 2004

